

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, nueve (09) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No243

MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTALORA

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-00098-00
DEMANDANTE:	ISABEL ROCIO MARIN GONZALEZ Y OTRO
DEMANDADO:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DESAJ
ASUNTO	LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a decidir si existe mérito o no para librar mandamiento de pago en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en virtud de la solicitud de ejecución de sentencia a continuación del proceso ordinario presentada por los señores Isabel Rocío Marín González y Andrés Felipe Machado Marín, quienes actúan a través de apoderado judicial debidamente constituido.

II. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud del mandamiento de pago

Por conducto de apoderado judicial, los señores Isabel Rocío Marín González y Andrés Felipe Machado Marín presentaron solicitud de ejecución de sentencia a continuación del proceso ordinario contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitando que se librara mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas: **(i)** \$62.499.360 pesos por concepto de perjuicios morales para Andrés Felipe Machado Marín; **(ii)** \$54.686.940 pesos por concepto de perjuicios morales para Isabel Rocío Marín González; **(iii)** \$4.213.354,53 por concepto de perjuicios materiales en modalidad de daño emergente para Andrés Felipe Machado Marín; **(iv)** \$23.669.432,03 pesos por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante para Andrés Felipe Machado Marín; **(v)** \$5.374.100 por intereses moratorios a la tasa DTF anual al 12/02/2019; \$2.088.994 por intereses moratorios a la tasa comercial al 27/02/2019; **(vi)** los intereses moratorios, causados a partir de la fecha de presentación de la demanda y hasta cuando se haga efectivo el pago; **(vii)** y por las costas del proceso.

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en la sentencia del 14 de marzo de 2018¹, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en la cual se decidió:

“PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 19 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

*a) **DECLÁRASE** responsable a la **Rama Judicial** por la privación injusta de la libertad del señor **ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN**.*

*b) **CONDÉNASE** a la Rama Judicial a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, **por concepto de perjuicios morales**:*

*ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN, (afectado directo) 80 SMLMV
ISABEL ROCÍO MARÍN GONZÁLEZ, (hija) 70 SMLMV*

*c) **CONDÉNASE** a la **Rama Judicial** a pagar **\$4.213.354,53 y \$23.669.432,03** en favor del señor **ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN**, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y de lucro cesante, respectivamente.*

*d) **NIÉGANSE** las demás pretensiones de la demanda.”.*

(...)”.

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 12 de abril de 2018, tal como quedó en la constancia expedida por dicha Corporación, visible a folio 289 del cuaderno proceso ordinario.

III. CONSIDERACIONES

3.1 DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA² establece que son títulos ejecutivos: **(i) las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a**

¹ Ver folios 13 a 37 del cuaderno demanda ejecutiva

² Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato - que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual - o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

El artículo 305³ del CGP señala que se podrá exigir la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.

Por su parte el artículo 306⁴ del CGP estableció que cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero el acreedor sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución de la misma ante el juez del conocimiento para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y una vez formulada la solicitud, el juez librará mandamiento ejecutivo según lo resuelto en la parte resolutoria de la sentencia.

A su vez, el artículo 307⁵ del CGP precisa que cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez meses desde la ejecutoria.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

³ Artículo 305. Procedencia. Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.

Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta.

⁴ Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutoria de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

(...)

⁵ Artículo 307. Ejecución contra entidades de derecho público. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.

El artículo 422 del CGP⁶ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:⁷

1. *La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.*
2. *La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.*
3. *La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.*

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁸:

“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con

⁶ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁷ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁸ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.



palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,⁹ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.¹⁰

Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

Respecto a los elementos formales del título ejecutivo, es de precisar que estos son los que se refieren a los documentos que contiene el respectivo título ejecutivo y a la forma en la que deben aportarse. Es de aclarar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha entendido que, en los asuntos donde se pretende el cumplimiento de decisiones judiciales a través del proceso ejecutivo, el título que presta mérito no es de los denominados “complejos”¹¹; puesto que solo se requiere copia de la sentencia ejecutoriada con la que se reconoció y ordenó el pago de una suma de dinero, ya que es esta la que contiene la obligación expresa, clara y exigible. Al respecto, en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016,¹² se indicó lo siguiente:

“(…) Por ello, la sentencia proferida por los jueces administrativos, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la

⁹ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

¹⁰ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

¹¹ Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en providencia 14 de marzo de 2019 Radicación número: 25000-23-42-000-2015-02057-01(0044-16).

¹² Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez Bogotá, D.C. Sentencia del 18 de febrero de 2016 bajo el número de radicado: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC) Actor: Flor Maria Parada Gómez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Posición reiterada en la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2017, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, dentro del proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC) « Esta Corporación a través de la Sección Tercera ha señalado que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. [...] No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, **no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el título ejecutivo.** [...] De la norma anterior [artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos... (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, según el CPC y el CPACA la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.

ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia. Es cierto que la norma citada indica que los actos administrativos expedidos por las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando que los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que declara, constituye el derecho u ordena la condena”.

Así mismo, se determinó que exigir la copia auténtica del acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial a ejecutar, se constituye en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”. Con relación a ello, se indicó:

“Repárese que las resoluciones núm. PAP 039428 del 21 de febrero de 2011 y núm. UGM 010620 de 2011 fueron expedidas por la entidad con el único propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias citadas, luego, no son actos administrativos que las complementaron o adicionaron y en modo alguno cambiaron lo que en ellas se encuentra ordenado. En consecuencia, no forman parte del título ejecutivo como lo expresó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, a la entidad demandada correspondía demostrar que ya había cumplido la obligación impuesta en las sentencias, para lo cual debía allegar las pruebas que lo demostraran, que en este caso, no son otras que los actos administrativos expedidos en cumplimiento de la sentencia, conforme lo consagrado en el artículo 509 del C.P.C.. Al ordenarse a la parte demandante que allegara copia auténtica de los actos administrativos que dieron cumplimiento parcial a la condena impuesta en la sentencia, es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cual fundamenta la intervención en sede de tutela.

Bajo tal perspectiva, en nada influye dentro del proceso ejecutivo que las mencionadas resoluciones hubiesen sido aportadas en copia simple y en esa medida, al Tribunal correspondía librar mandamiento de pago, puesto que el título ejecutivo estaba conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo de las cuales surgió la obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad.¹³ (Negritas fuera del texto)

Entre tanto, en lo que refiere a la forma en que se deben aportar las sentencias que contienen la obligación a ejecutar, es preciso indicar que el artículo 114 del Código General del Proceso dispone:

“Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

(...)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.... (Negrillas por fuera de texto)

Como se puede colegir, las sentencias que se pretenden valer como título ejecutivo, conforme al precitado dispositivo normativo se deben aportar con su respectiva constancia de ejecutoria. Así mismo, el Consejo de Estado, en sede de tutela indicó que “el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, no

¹³ *Ibidem*

exige que el mencionado documento deba estar en original. En efecto, la norma se limita a señalar que constituyen título ejecutivo “las sentencias debidamente ejecutoriadas (...)”, además, “el artículo 244 del Código General del Proceso, establece que “(...) los documentos públicos o privados emanados de las partes o terceros, en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos (...)”. Así mismo, dispone que (...)” se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo”.¹⁴

De acuerdo con los apartes normativos, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, en relación a los procesos ejecutivos derivados del incumplimiento total o parcial de una sentencia judicial, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

1. Prestarán mérito ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se haya condenado a la administración al pago de una suma de dinero.
2. El título ejecutivo en mención debe contener una obligación expresa, clara y actualmente exigible.
3. Las sentencias, junto con su constancia de ejecutoria, pueden ser aportadas al proceso en copia simple, toda vez que se presumen auténticas de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso.
4. No es indispensable aportar la copia o el original del acto administrativo que da cumplimiento a la decisión judicial, toda vez que este no hace parte del título ejecutivo que solo está constituido por las sentencias judiciales que contienen la obligación. De exigirse, el juez incurrirá en un exceso ritual manifiesto.
5. Si bien el acto administrativo que acata la decisión judicial no hace parte del título ejecutivo, este sirve de contraste para determinar si la sentencia fue acatada a cabalidad por parte de la administración.

3.2. DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO EJECUTIVO:

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, pues si bien el artículo 298 se titula “procedimiento”, lo cierto es que en dicho precepto normativo se impone al juez el deber de hacer cumplir las obligaciones

¹⁴ Aparte tomado del fallo de tutela del 3 de agosto de 2017, bajo el proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC)

contenidas en determinados títulos ejecutivos, mas no se refiere a un genuino procedimiento de ejecución.

Sin embargo, la misma normatividad en su artículo 306 señaló que, en aquellos aspectos no contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en el cual de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo. La norma mencionada es del siguiente tenor:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, se tiene que los procesos ejecutivos administrativos, hoy en día, se deben tramitar por las reglas del proceso ejecutivo de que trata los artículos 305, 306, 307, 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012.

Lo anterior, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado¹⁵ al manifestar que el proceso ejecutivo está regulado integralmente por el CGP, y que por ello su desarrollo nace bajo el amparo de dicho estatuto, sobre este punto ha sostenido:

“Los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones¹⁶, realización de audiencias¹⁷, sustentaciones y trámite de recursos¹⁸, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo. (Negrillas fuera del texto original).

Por otra parte la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 25 de julio de 2017¹⁹, estableció:

“3.2.5. Conclusiones.

En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente: a. Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307²⁰ del CGP, y se

¹⁵ CONSEJO DE ESTADO. i) Sección Segunda, Subsección B, radicado 680012333000 2016-01034 01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.-’

¹⁶ Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012.

¹⁷ Ver artículos 372 y 373 C.G.P.

¹⁸ Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.

¹⁹ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. CP: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ. Providencia del 25 de julio de 2017. Radicación número: 11001-03-25-000-2014-01534-00(4935-14)

²⁰ Normas aplicables en esta jurisdicción en virtud de lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011

complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del mismo estatuto.

b. Para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:

*1. Iniciar el **proceso ejecutivo a continuación del ordinario**, para lo cual debe:*

- Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutive de aquella y en la cual se incluyan los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4. de esta providencia.*

Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto.

- En este caso **no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario.***
- El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307²¹ del Código General del proceso.*

*2. Si lo prefiere el demandante, **puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA**, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.*

En este caso el objetivo será que la sentencia se ejecute a través de un proceso ejecutivo autónomo de conformidad con el Libro Tercero, Sección Segunda, Título Único del Código General del Proceso, relativo al proceso ejecutivo, en aplicación de la remisión normativa regulada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.” (Negritas fuera de texto)

3.3. CASO CONCRETO:

Como se puede observar del anterior acápite, para librar mandamiento de pago se debe verificar:

1. La solicitud de ejecución de la sentencia a continuación fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
2. El término para la presentación de la demanda no ha vencido;
3. La solicitud formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley;

²¹ Normas aplicables en esta jurisdicción en virtud de lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011

4. Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
5. Si hay lugar al reconocimiento de intereses o no.

- **DE LA JURISDICCIÓN Y DEL JUEZ COMPETENTE:**

En el presente asunto, el artículo 299 del CPACA en relación con la ejecución de condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, consagra lo siguiente:

“ARTÍCULO 299.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

Según la regla de competencia por razón del territorio consagrada en el numeral 9° del artículo 156 del CPACA, *“En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”.*

Es claro entonces que en vigencia del CPACA, será competente para la ejecución de las condenas impuestas por esta jurisdicción a una entidad pública, el mismo Juez que profirió la respectiva providencia.

Por lo anterior, este Despacho es competente para conocer de la demanda ejecutiva.

- **CADUCIDAD:**

La Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 el plazo para la presentación oportuna del libelo introductorio de cada medio de control. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del proceso ejecutivo de títulos derivados del contrato, de decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales del estado de conformidad con el literal (k) de la referida disposición, se estableció un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

En el presente asunto, la **acción ejecutiva se encuentra vigente** al momento de la presentación de la solicitud de ejecución de la sentencia a continuación, pues se interpuso dentro del término señalado en el artículo 164, literal K), toda vez que la sentencia del 14 de marzo de 2018, proferida por el Consejo de Estado que sirve como base del recaudo ejecutivo, quedó ejecutoriada el 12 de abril de 2018 y la demanda ejecutiva se presentó el 05 de marzo de 2019²², es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

- **LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA A CONTINUACIÓN FORMULADA POR EL EJECUTANTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN LA LEY:**

Revisada la solicitud, se tiene que los ejecutantes **se encuentran legitimados en la causa por activa**, por ser los beneficiarios de la sentencia de segunda instancia.

Por su parte, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se encuentra **legitimada en la causa por pasiva**, por ser la condenada en la sentencia proferida por el Consejo de Estado.

Revisada la demanda, la misma cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y ss del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones²³, los hechos fundamento de las pretensiones²⁴, copia de sentencia del 14 de marzo de 2018, proferida el Consejo de Estado, la constancia de ejecutoria, la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante²⁵ y cuatro (04) copias para el traslado.

- **QUE EL TÍTULO JUDICIAL SEA CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE, ESTO ES, I) QUE HAYA UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA O DETERMINABLE; II) LA EJECUTANTE ACREDITE QUE LA OBLIGACIÓN ESTÁ A SU FAVOR; III) SE TIENE CERTEZA DE QUIÉN ES EL DEUDOR; IV) TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO LEGAL O SE CUMPLIÓ LA CONDICIÓN SIN QUE EL DEUDOR CUMPLIERA CON LA OBLIGACIÓN QUE TENÍA A SU CARGO.**

En el caso concreto, el título que se pretende ejecutar es complejo, toda vez que se encuentra conformado por la sentencia del 14 de marzo de 2018; la constancia de ejecutoria del 12 de abril de 2018, que sirven como base del recaudo ejecutivo.

Debe mencionar el Despacho que la obligación es **EXPRESA**, pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es decir, en la sentencia judicial se condenó a la Nación

²² Ver folio 7

²³ Ver folio 1 y vuelto

²⁴ Ver folios 1 y vuelto - 2

²⁵ Ver folios 7 y vuelto

– Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar unas sumas de dinero a favor de los señores Andrés Felipe Machado Marín e Isabel Rocío Marín González, hoy ejecutantes.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, pues es claro que la efectividad de la obligación debe surtirla la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a favor de los ejecutantes por unas sumas determinadas, con sus correspondientes intereses moratorios.

Es **EXIGIBLE** pues ya ha transcurrido más de un (1) año, desde que la sentencia proferida por el Consejo de Estado quedó ejecutoriada el 12 de abril de 2018, la entidad ejecutada no ha dado cumplimiento según lo expuesto por los ejecutantes, por cuanto no se efectuó el pago de la obligación en ella contenida, en consecuencia dicha obligación se hace exigible.

Finalmente, la obligación se encuentra determinada en la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado del 14 de marzo de 2018, la parte ejecutante acreditó estar legitimada en la causa por activa, se tiene certeza que el deudor es la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y transcurrió el plazo fijado en el artículo 195 del CPACA, para el cumplimiento de la misma, sin que se haya realizado el pago de la obligación.

- **HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE INTERESES O NO:**

Ahora, en cuanto a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 177 del CCA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

- Las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia devengarán intereses comerciales y moratorios.
- Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

En el presente asunto, a folios 60 a 65 obra la correspondiente radicación de la solicitud de cumplimiento del fallo judicial objeto de ejecución, radicada por el apoderado judicial de la parte ejecutante el 01 de agosto de 2018, es decir, dentro del término de los 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (12 de abril de 2018). Por tanto, en este caso no cesaron los intereses corrientes y moratorios.

En este punto, se destaca que los intereses por pagó tardío se causan por mandato legal (artículo 177 del Decreto 01 de 1984²⁶ y artículo 195 de la Ley 1437 de 2011²⁷) y, por ende, no es necesario que la sentencia los estipule expresamente. Sobre el particular, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (2008)²⁸ ha dicho: *«los intereses que devengan las cantidades líquidas reconocidas en las sentencias de esta jurisdicción se deben reconocer y pagar, sin que necesariamente el punto deba ser objeto de un pronunciamiento expreso por parte del fallador pues el inciso quinto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé una situación que no hace parte de la contención sino de la ejecución ante el ente administrativo, que opera como una consecuencia legal de la imposición de la condena»*.

Siendo así, la normativa aplicable para la liquidación de los intereses causados a partir del 02 de marzo de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2007, se liquidarán de conformidad con el artículo 195 de la Ley 137 de 2011.

Esa normativa dispone, en el numeral 4 del artículo 195, que *«las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria»*.

Por lo anterior y una vez estudiada la solicitud de ejecución de la sentencia a continuación por el despacho, se evidencia que esta reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes del CGP y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem, el despacho dando cumplimiento al art. 430 del CGP por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

RESUELVE

PRIMERO.- LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor de los señores ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN e ISABEL ROCIO MARIN GONZALEZ, por los siguientes valores:

²⁶ ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

(...)

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorias.

²⁷ ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial.

²⁸ Providencia del 3 de abril de 2008, expediente 25000-23-25-000-2003-07833-01.



- Por concepto de perjuicios morales para ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN, la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 62.499.360).
- Por concepto de perjuicios morales para ISABEL ROCIO MARÍN GONZÁLEZ, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 54.686.940).
- Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente para ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN, la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 4.213.354,53).
- Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para ANDRÉS FELIPE MACHADO MARÍN, la suma de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS (\$ 23.669.432,03).
- Por los intereses moratorios sobre las sumas referidas anteriormente, a la tasa DTF ANUAL la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS (\$ 5.374.100) al 12 de febrero de 2019.

PERIODO EN MORA	No. días	% int. Anual	% int. diario	CAPITAL	int. Causado
13042018 – 30042018	18	4.90	0.013	145.069.086	360.521
01052018 – 31052018	31	4.70	0.012	145.069.086	539.656
01062018 – 30062018	30	4.60	0.012	145.069.086	522.248
01072018 – 31072018	31	4.57	0.012	145.069.086	539.656
01082018 – 31082018	31	4.53	0.012	145.069.086	539.656
01092018 – 30092018	30	4.53	0.012	145.069.086	522.248
01102018 – 31102018	31	4.43	0.012	145.069.086	539.656
01112018 – 30112018	30	4.42	0.012	145.069.086	522.248
01122018 – 31122018	31	4.54	0.012	145.069.086	539.656
01012019 – 31012019	31	4.56	0.012	145.069.086	539.656
01022019 – 12022019	12	4.54	0.012	145.069.086	208.899
TOTAL INTERESES A LA TASA DTF					\$ 5.374.100

- Por los intereses moratorios sobre las sumas referidas anteriormente, a la tasa COMERCIAL la suma de DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.088.994) al 27 de febrero de 2019.

PERIODO EN MORA	No. días	% int. Anual	% int. diario	CAPITAL	int. Causado
13022019 – 28022019	18	19.70	0.080	145.069.086	2.088.994
TOTAL INTERESES A LA TASA COMERCIAL					\$ 2.088.994

- Por los intereses moratorios causados a partir de la fecha de presentación de la demanda y hasta cuando se haga efectivo el pago total de la obligación.

- Por las costas del proceso y las agencias en derecho, las cuales se liquidarán en la oportunidad procesal pertinente.

SEGUNDO.- Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

TERCERO.- ORDENAR a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

CUARTO.- NOTIFICAR por estado a la parte ejecutante.

QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el presente proveído a la entidad ejecutada **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, a través de su representante legal o a quien se haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al Ministerio Público²⁹ y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, corriéndole traslado conforme los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso en concordancia con los artículos 431 y 442 ibídem, la notificación se efectuará remitiendo mensaje de datos al correo electrónico³⁰ para notificaciones judiciales de las entidades y en la Secretaría de la Corporación, se dejará copia de la demanda y sus anexos a disposición de la misma.

SEXTO.- ORDENAR a la parte ejecutante que REMITA copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago, a través del servicio postal autorizado, a las siguientes partes del proceso: **a) la entidad demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, b) al Ministerio Público; y c) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**, en la forma y términos señalados en el inciso 5 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del C.G.P.

SEPTIMO.- RECONOCER personería al abogado **ORLANDO MUÑOZ RAMÍREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.212.408 de Cartago (V) y portador de la tarjeta profesional No. 156.453, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderado de la parte ejecutante, de conformidad con el poder visible a folios 8 a 9 del cuaderno de demanda ejecutiva.

²⁹ Artículo 171 No. 2 CPACA.

³⁰ Artículo 197 inciso 2 CPACA concordado artículo 612 CGP.

Radicación : 76001-23-33-000-2020-00098-00
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : ISABEL ROCIO MARIN GONZÁLEZ
Ejecutado : NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DESAJ



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada